

Elecciones, cambios políticos y nuevos gobiernos en Uruguay

Martín Puchet Anyul

2

0

3

El presente trabajo tiene como objetivos, realizar una descripción del proceso electoral que culminó el 26 de noviembre de 1989 en el Uruguay y hacer un análisis de sus resultados. Para alcanzar ambos, es necesario estudiar las condiciones políticas en que se realizaron las elecciones y no olvidar la presencia permanente, entre los uruguayos, de un concepto consensual de democracia. Creo que no falto a la verdad si afirmo que la libre elección de representantes y gobernantes en un pleno estado de derecho es ese concepto compartido.

La exposición se divide en cinco partes. La primera trata de las condiciones políticas. La segunda describe el sistema

electoral vigente y los partidos políticos que concurrieron a la contienda. La tercera presenta los rasgos principales de la campaña electoral y del acto electoral. La cuarta analiza las cifras resultantes y esboza la interpretación de algunos fenómenos importantes. Por último se consideran los resultados políticos y gubernamentales de la elección y se delínean algunas perspectivas del próximo gobierno.

CONDICIONES POLÍTICAS Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

La campaña electoral y el acto electoral celebrados en 1989 son los más



democráticos del último cuarto de siglo. Los últimos acontecimientos de esa índole, ocurridos uno en 1971 antes de la dictadura y otro en 1984 durante las postrimerías del régimen cívico-militar, se desarrollaron en condiciones irregulares.

Las elecciones de 1971 se efectuaron durante el último año del gobierno de Pacheco Areco. Toda su gestión tuvo lugar en medio del más enconado, participativo y largo conflicto social del país contemporáneo y se caracterizó por su habilidad para exacerbarlo y ahondarlo. Las soluciones de fuerza a las huelgas sindicales, las respuestas represivas a los movimientos estudiantiles, las violaciones a los derechos ciudadanos de expresión, reunión y asociación y los atentados contra la libertad de los individuos distinguieron el periodo de gobierno transcurrido entre diciembre de 1967 y febrero de 1972. En particular, los meses de la campaña electoral estuvieron signados por la censura y la clausura de la prensa opositora, los ataques parapoliticales a locales de los partidos políticos de izquierda y el uso y abuso de los recursos del Estado. Éstos se desviaban a favor de la fracción partidaria del presidente, que pretendía reelegirse sometiendo a plebiscito, en el mismo acto eleccionario, una reforma constitucional con esa finalidad.¹

El proceso electoral de 1984 se llevó a cabo en las condiciones y según las reglas pactadas con las fuerzas armadas que detentaban todavía el poder. La prisión

de varios cientos de militantes políticos, entre ellos muchos dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y del Frente Amplio y el principal líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, la vigente represión contra las protestas ciudadanas antidictatoriales y la amplia proscripción de candidatos democráticos, como el mismo Ferreira y el presidente del Frente Amplio, Liber Seregni, simbolizaban el clima preelectoral de aquel año. Desde el punto de vista reglamentario aún había grupos políticos prosritos que concurrían bajo otras denominaciones, como el Partido Comunista, e impedimentos para acceder a los medios de comunicación masiva.²

Por el contrario, las elecciones de 1989 transcurrieron en un clima democrático ejemplar. No sólo no existieron las amenazas, la represión, los presos políticos y las proscripciones anteriores sino que tampoco hubo el ostentoso y abusivo uso del patrimonio público para favorecer al candidato oficialista. Los claudios de 1971 y rehenes de 1984, los tupamaros de ayer y de hoy, participaron en la contienda electoral junto a muchos dirigentes frenteamplistas que, como Seregni o comunistas como Arismendi, volvieron a presentar sus candidaturas. Es decir, la transición, comenzada con destino incierto mediante el pacto o acuerdo del Club Naval, culminó en la democracia.

Cualquier valoración del resultado de esta última elección no debe ignorar los rasgos principales o cruciales del proceso

¹ La bibliografía sobre ese periodo es abundante, bastan el largo artículo contemporáneo a los hechos de Carlos Real de Azúa, "Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy", en Benvenuto *et al.*, *Uruguay hoy*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971, pp. 145-321, y el reciente libro de Gonzalo Varela, *De la república liberal al Estado militar. Uruguay, 1968-1973*, Nuevo Mundo, Montevideo, 1988.

² Sobre el periodo dictatorial conviene consultar la historia de Gerardo Caetano y José Rilla, *Breve historia de la dictadura*, EBO-CLAEH, Montevideo, 1986, y el informe del SERPAJ, *Uruguay nunca más*, Montevideo, 1989, que testimonia claramente la entidad de las violaciones a los derechos humanos.

que condujo de la dictadura a la democracia. Cuatro cuestiones centrales enfrentaba el gobierno cuando Sanguinetti asumió la presidencia el 1 de marzo de 1985. Ellas eran: primera, en importancia y cronológicamente, qué hacer con quienes presuntamente violaron los derechos humanos durante el período dictatorial; segunda y estrechamente relacionada con la anterior, cómo subordinar las fuerzas armadas al poder civil; tercera y en el ámbito político económico, qué relación mantener y desarrollar con el movimiento sindical, y cuarta, cómo administrar la crítica situación económica heredada.³

Los dos primeros grandes asuntos de la agenda de Sanguinetti ocuparon su gestión hasta abril de 1989. La solución gubernamental atravesó, si se simplifica al máximo su exposición, dos fases: la negociación de una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar una iniciativa de ley que evitara juzgar a los militares y policías presuntamente responsables de delitos contra los derechos humanos, y luego, la resistencia, para mantener la ley aprobada, ante los embates políticos y jurídicos de quienes reclamaban, desde los inicios del nuevo régimen, verdad y justicia.

La mayoría parlamentaria se logró en éste, como en otros muchos asuntos, mediante un acuerdo entre el gobernante Partido Colorado y el ala mayoritaria del Partido Nacional, tradicional opositor y entonces preocupado por la gobernabilidad amenazada, sobre un proyecto propuesto por esta última. El proyecto imponía, fundamentalmente, la renuncia de la fiscalía a su pretensión punitiva en el caso de delitos cometidos por mili-

tares y policías, en el desempeño de sus funciones, cuando hubieran sido contra los derechos humanos, no contra la propiedad, y siempre que hubieran ocurrido durante el régimen de facto. Desde el punto de vista procesal, los jueces que recibieran denuncias contra personas comprendidas por las generales antedichas deberían consultar, antes de proceder, al poder ejecutivo. Éste les informaría si la fiscalía se abstenía, de acuerdo con la ley, de la persecución del delito, aunque ésta fuese de oficio. El proyecto fue aprobado el 26 de diciembre de 1986 y tuvo votos contrarios de parlamentarios colorados (un diputado), blancos (varios senadores y diputados) y frenteamplistas (todos).

La aprobación fue seguida de la protesta y del repudio de muchos sectores sociales. Un grupo plural de ciudadanos encabezado por las viudas de tres políticos asesinados por la dictadura en territorio argentino —Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini y Gerardo Gatti— convocaron a la ciudadanía a recolectar las firmas de la cuarta parte de la misma con la finalidad de recurrir al referéndum, prescrito en la Constitución, respecto a la ley de “caducidad de la pretensión punitiva del estado”. Una larga resistencia, primero a la recolección de firmas, luego a su certificación y, por último, a la opción plebiscitaria de derogar la ley, fue practicada por el presidente Sanguinetti, su gobierno y sus aliados. La acción defensiva no estuvo exenta de artilugios y maniobras que pusieron en duda hasta la legitimidad de los órganos electorales del Estado. Finalmente, el 16 de abril de 1989 la ciudadanía resolvió mantener la ley y el presidente archivó, con indudable éxito para su concepción, los dos asuntos más espinosos y complejos de su gestión. El primero, no sometiendo a juicio a ningún presunto responsable y,

³ Al respecto véase Marcelo Pereira, *1980-1984: operación Sanguinetti*, cui, Montevideo, 1985.

el segundo, quitándole motivo valedero a cualquier intento de insubordinación, a pesar de tener que conceder, junto con la mayoría de los ciudadanos, que no todos los hombres son iguales ante la ley.⁴

La relación del nuevo gobierno civil con el movimiento sindical podría haberse dado de dos maneras: desconociendo su estructura e intentando reglamentarlo, para que no afectara la fijación de los salarios, o negociando con sus dirigentes, para minimizar una recuperación del salario real que comprometiera los objetivos antiinflacionarios de la política económica. Esta última estrategia era más redituable, desde el punto de vista de la gobernabilidad, en la medida que creaba menostensiones entre el gobierno y la dirigencia sindical. Para esta dirigencia, el reconocimiento institucionalizado que se brindaba hacía más fácil la reorganización política e institucional, a la vez que le permitía reasumir su papel, como actor privilegiado, en el seno del sistema político ampliado. En ese ámbito, los líderes sindicales históricos siempre habían desarrollado un discurso y una política que trascendía su papel meramente reivindicativo de las demandas de sus agremiados. Se produjo así otro intercambio político que complementó aquel que fue fundamento de la aprobación y la defensa de la ley de caducidad. El acuerdo supuso aceptar contratos salariales de largo plazo, que tendieran a evitar alteraciones bruscas y

ascendentes en los costos y a suavizar la pugna distributiva, a cambio de un reconocimiento institucional y una participación política que generaban un desarrollo orgánico y una perspectiva nacional aglutinante del movimiento sindical. El resultado fue que el gobierno impidió, en todos los casos, rebasar el tope salarial. Pese a ello los sindicatos adquirieron la estatura organizativa de antaño, aun en aquellas ramas donde su fuerza numérica ha sido diezmada por los cambios económicos.⁵

La cuarta cuestión de la agenda del presidente Sanguinetti se resolvió mediante una política económica de ajuste. Esta siguió, puntualmente y con cierta moderación, el ciclo de la disponibilidad de divisas para atender los compromisos externos. Así, cuando cayó el monto de la factura petrolera y mejoraron los precios de algunas exportaciones tradicionales, se reactivó la economía; y por el contrario, cuando el efecto de estos beneficios declinó, el crecimiento se desaceleró, dando lugar a la recesión que coincidió, por causas económicas y por el empeño de la tecnocracia, con el periodo electoral. Esta política económica se basó en un tercer intercambio político: el presidente no acogió con entusiasmo y dedicación las medidas del ajuste estructural –privatización, desregulación, reglamentación sindical, reforma educativa desestatizadora, reducción de la seguridad social– y ofreció, a los más conservadores y ansiosos de los neoliberales, ubicados muchos en su entorno cercano y otros entre sus aliados de la gobernabilidad, un país estable en lugar

⁴ Véanse los documentos relativos al proceso de aprobación, referéndum y plebiscito de la ley en cui, Referéndum, Montevideo, 1987, y una revisión y valoración del mismo en Silvia Dutrént, "A 200 años de la Revolución francesa. Uruguay: no todos los hombres son iguales ante la ley", en Carlos Castro y Marcos Roitman, *América Latina entre los mitos y la utopía*, Universidad Complutense, Madrid, 1990.

⁵ Este intercambio político está analizado por Jorge Luis Lanzaro, "Movimiento obrero y reconstitución democrática. ¿Convencionalidad neocorporativa o aplicaciones neoliberales?", *Revista Mexicana de Sociología*, IIS-UNAM, México.

Cuadro 1
ALGUNOS INDICADORES SOCIALES DE URUGUAY. 1962-89

Producto interno bruto (PIB)*							
Periodos	63-66	67-71	72-76	77-81	82-84	85-89	
PIB al costo de los factores en pesos constantes de 1961, por habitante, dado el crecimiento intercensal							
	5 829	6 063	6 352	7 628	7 222	7 491	
PIB al costo de los factores en pesos constantes de 1961, por habitante dado el crecimiento natural							
	5 774	5 885	6 349	7 583	7 117	7 314	
PIB a precios de mercado en dólares constantes de 1980, por habitante							
		1 419	1 827	2 445	2 173	1 509	
<i>Distribución del ingreso nacional bruto a precios de mercado (en porcentajes)^b</i>							
Periodos	62-65	66-69	70-71	72-74	75-76	77-81	84-85
Sueldos y salarios (%)	43.4	40.2	41.9	36.6	33.2	27.9	27.0
Otros ingresos familiares (utilidades, intereses, alquileres y rentas)	36.2	37.8	34.9	39.9	41.7	46.4	54.0

Fuentes: * Los periodos están definidos entre los años de toma de posesión de los gobiernos y los años electorales, excepto para 1976 y 1981 que transcurrieron bajo la dictadura pero eran años electorales según el calendario institucional. El PIB para el periodo 1960-1976 al costo de factores y a precios constantes de 1961, está tomado directamente de las cifras del BCU, y para el periodo 1977-1989 está calculado según las tasas de crecimiento del PIB al costo de factores y a precios constantes de 1978. El último año es una estimación preliminar. El PIB en dólares constantes por habitante está calculado mediante la cifra en dólares corrientes deflactada por el índice implícito en el PIB de EU con 1980=100 según la edición del World Bank de las tablas mundiales de 1988-89, extraídas de sus archivos, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, pp. 604-5 y 600-1. La población anual se calculó, en el primer caso, mediante la tasa de crecimiento exponencial anual que resulta de interpolar las cifras censales de 1963, 1975 y 1985. En el segundo caso, se usó la tasa de crecimiento natural siguiente para cada subperiodo: 1960-64: 1.25%; 1965-75: tasa correspondiente a la hipótesis baja de José L. Petrucelli, "Uruguay, situación demográfica", en *Uruguay: datos básicos*, FCU, Montevideo, 1976, p. 19; 1976-85: 0.87%; 1986-89: 0.84%.

^b Alicia Melgar, "El mercado de trabajo y la distribución de ingresos", Instituto de Economía-FESUR, en *Uruguay 87: la coyuntura económica nacional e internacional*, FCU, Montevideo, 1987, p. 486, cuadro núm. 7.

Índice del salario privado en Montevideo (1968=100)^c

Periodos	66-69	70-71	72-74	75-76	77-81	1984	1986
Índice	108.6	108.5	90.6	77.0	72.5	61.7	76.9

Relación entre asalariados e informales en Montevideo^d

Años	1968	1973	1979	1986
Número de asalariados por cada informal	3.4	2.7	2.6	1.9

Participación del gasto social en el PIB (en porcentajes)^e

Años	1961	1975	198
Educación	2.5	2.7	2.2
Salud pública	1.3	1.0	1.2

^c Alberto Hintermeister, "Tendencias de largo plazo del mercado laboral", en *Suma*, 3(4), CINVE, Montevideo, 1988, p. 214, cuadro núm. 4.

^d Rosario Aguirre y Estela Méndez, "El trabajo informal urbano en el Uruguay", *Suma* 3(4), CINVE, Montevideo, 1988, p. 98, cuadro núm. 4.

^e Tomado de Hugo Davrieux, "¿A quién beneficia el gasto público social?", *Suma*, 2(2), CINVE, Montevideo, 1987, p. 108, cuadro núm. 1.

de la transformación profunda de la institucionalidad que afectara a los mercados, que era lo que ellos exigían.

El acuerdo para resolver la amenaza militar, el intercambio político con el movimiento sindical y el pacto tácito con los apresurados del neoliberalismo hicieron posible, junto con una cultura política de respeto a la voluntad ciudadana y al estado de derecho, la consecución de la democracia uruguaya. Pero ella adviene con un poder militar, en lo esencial, inalterado y en medio de la mayor desigualdad social de los últimos 25 años.⁶

La ley de caducidad reformó la educación militar al disolver sus liceos, equivalentes a la secundaria común, pero

mantuvo las formas de cooptación para la selección de los altos mandos. A su vez, la estructura militar se aglutinó ante los embates de quienes reclamaban la derogación de la impunidad militar y sus mandos se mostraron altaneros cuando la ciudadanía impidió que se los juzgara.

El país es más pobre y mucho más desigual que cuando ocurrió la última elección plenamente democrática en el lejano 1966. Las cifras del producto interno bruto por habitante, de la distribución del ingreso nacional bruto y del salario real, presentadas en el cuadro 1, así lo atestiguan. Por su parte, la sociedad está más desintegrada hoy que ayer. Ello se aprecia en la decreciente relación entre asalariados e informales y se pondera por la repercusión perniciososa que tiene mantener tasas similares de gasto social con un producto interno con tendencia al declive, tal como se ve en el mismo cuadro.

⁶ Para el periodo del gobierno democrático véase Marcos Gutiérrez et al., *Uruguay, 1985-89: impulso democrático, bloqueo conservador*, cui, Montevideo, 1989.

En consecuencia, la transición ha terminado y la democracia se ha erigido, sin recortes ni cortapisas, sobre un país más desigual y más desintegrado.

SISTEMA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS

El sistema electoral, en el que se ha plasmado el principal procedimiento democrático, es el mismo que conoce el país desde la Constitución de 1967. Respecto a sus características técnicas—doble voto simultáneo, reglas de acumulación de sufragios y ley de lemas— ha permanecido, con modificaciones secundarias, desde 1942.⁷ A pesar de su larga data es conveniente describir algunos de sus aspectos fundamentales que introducen dificultades en el momento de analizar los resultados.

El poder ejecutivo se elige por mayoría simple de los partidos contendientes en una sola ronda de votación. El poder legislativo se forma por representación proporcional. La cámara alta (Senado) surge de una sola circunscripción electoral, formada por todo el país, y la cámara baja (Representantes) está integrada por diputados electos por departamento (división administrativa y geográfica) según la parte alícuota de su electorado y, con la única restricción, de que no sean menos de dos por circunscripción.

El votante es enfrentado a un conjunto de partidos entre los que tiene que elegir, y a su vez debe optar por candidatos, de ese partido, a nivel nacional—presidente, senadores y diputados— y a nivel local—intendente departamental y ediles (especie de diputados departamentales). Es

decir, que el elector opta por un partido, denominado lema en el sistema electoral y por dos nóminas de candidatos, una nacional y otra local, que deben ser, a su vez, del lema elegido. Así, se vota, simultáneamente, por el partido o lema y por alguna de sus listas de candidatos; este es el doble voto simultáneo.

La acumulación de los votos se hace en tres niveles. Primero se suman las hojas de votación que contienen iguales nóminas de candidatos, o sea que tienen los mismos candidatos a presidente, a los cargos de senadores y a un número variable, según la circunscripción, de representantes en el nivel nacional. De forma tal que corresponden a un mismo candidato a la presidencia diferentes nóminas de candidatos a senadores y diputados, y es costumbre, obviamente, que existan más listas de diputados que de senadores. Luego se adicionan las hojas de votación que tienen candidatos comunes a senadores y sucesivamente a presidente. Esas acumulaciones parciales conforman los sublemas. Por último, se suman las hojas de votación del mismo lema.

Estas reglas de acumulación condicionan el juego político y electoral de los partidos. Para un candidato a diputado, es mucho más importante la negociación interna que lo ubique dentro de un sublema porcentualmente relevante y en un lugar alto en su lista, que su propia campaña electoral. En realidad, las campañas electorales decisivas son las de los candidatos a presidente y, eventualmente, a senador en el nivel nacional y las de los candidatos a intendente en el nivel local. De esta característica del sistema electoral provienen muchos de los hábitos negociadores del personal político y, también, gran parte de sus actitudes clientelísticas, que son distintivos de la cultura política nacional.

⁷ Una exposición detallada del sistema electoral está en Juan Rial, *Uruguay: elecciones de 1984. Sistema electoral y resultados*, CIAPE-IIDH, San José, 1986.

La posesión o titularidad del lema, que sirve para participar en la elección y contar con sublemas que permitan beneficiarse de las reglas de acumulación, es el tercer rasgo importante del procedimiento electoral. Durante la década de los veinte, las denominaciones partidarias o lemas eran de libre disponibilidad, y los acuerdos o pactos electorales entre los candidatos determinaban cómo se acumulaban los votos de cada partido. Pero, durante el periodo dictatorial de los años treinta, se restringió esta prerrogativa imponiendo la acumulación forzosa a quienes usasen un lema. Asimismo, se le dio posesión del lema a aquel sublema que lograra la mayoría parlamentaria electa y se les otorgó carácter permanente sólo a los partidos que tuvieran representación parlamentaria en dos elecciones sucesivas. Después del pacto del Club Naval, mediante el que se salió de la reciente dictadura, se reconocieron como permanentes todos los lemas que participaron en la última elección del periodo democrático –la de 1971– y se radicó la titularidad de un lema, con capacidad para abrir sublemas, en cualquier cinco por ciento del electorado que pudiera formar listas.

Estas características hacen imposible que los ciudadanos voten por candidatos de diversos partidos para diferentes cargos, pues imponen una hoja de votación rígida, donde figuran todos los candidatos a todos los cargos con sus respectivos suplentes, y unifican la duración de los mandatos de los puestos de elección.

Las elecciones de 1989 se celebraron una vez culminada la transición a la democracia, mediante el sistema electoral tradicional y entre un conjunto de partidos en transformación. El sistema de partidos que participó está compuesto por los dos partidos tradicionales: el Colorado y el Nacional (o Blanco) y la

coalición de partidos y grupos de izquierda: Frente Amplio y alianza electoral centroizquierdista Nuevo Espacio. La composición y perfil político de los componentes de estos partidos se describe a continuación.

El Partido Colorado está integrado por dos grandes alas: el pachequismo y el batllismo unido. La primera llevó como candidato a la presidencia a su líder histórico el ex presidente Jorge Pacheco Areco. La segunda, al sobrino nieto de su fundador, Jorge Batlle, y al discípulo y emergente Hugo Fernández Faingold, que no acató el resultado de las elecciones internas del sector batllista.

El pachequismo es un movimiento arraigado en la tradición más conservadora del Partido Colorado, aquella que remontándose hasta antes del periodo progresista de las presidencias de José Batlle y Ordóñez (1903-07 y 1911-15) está anclada en el espíritu fundacional, ordenador y discriminatorio subyacente en el origen de la república. Su discurso combina el autoritarismo cerril de que Pacheco sabe cómo hacerlo –a pesar de que el país entero rumoraba sobre la senilidad o la chochez del líder–, con una reivindicación populista de los derechos de los marginados proclamada, recientemente, con clara finalidad electoral. La reciedumbre y hasta la brutalidad en el ejercicio del poder son las virtudes presidenciales que los pachequistas evocan, con frecuencia, para concitar el apoyo de los ciudadanos.

El batllismo unido, organizado en esta elección otra vez, alrededor de un Batlle, gracias a la sagacidad del último de la dinastía para manejar los conflictos internos de su fracción y a la reconocida torpeza de su ocasional oponente, el vicepresidente Enrique Tarigo, es una fuerza, no sólo pluriclasista, como siempre se ha dicho, sino ideológicamente

difusa. Combina en su prédica la propuesta de la modernización y desarrollo del estado, creado por su fundador, con una defensa puntual de las concepciones del ajuste estructural acuñadas por la tecnocracia de los organismos financieros multilaterales. Al mismo tiempo, postula una política de acuerdos y compromisos con amplias fuerzas políticas e, incluso, sociales para imponer una transformación estructural que liquidaría parte de la base social de quienes se avinieran a pactar. A pesar de que esta fracción del coloradismo fue el principal actor de la transición a la democracia, su imagen electoral, generada fundamentalmente por su candidato presidencial oficial, proyectó las carencias de la gestión de Sanguinetti más que sus probables aciertos. Únicamente, el pequeño grupo de Fernández Faingold intentó una hábil defensa del accionar del presidente de la transición que no pudo diezmar, en lo más mínimo, la versión dominante difundida por el sector mayoritario. Y, por último, el batllismo inventó, mediante la presencia de Batlle en debates televisivos con todos sus oponentes, la forma más superficial e irresponsable de plantear sus concepciones y sus soluciones: aquella que supone siempre la ignorancia y el provincianismo intelectual de su ocasional contradictor.

El Partido Nacional se divide en tres corrientes: el herrerismo, el wilsonismo y el Movimiento Nacional de Rocha (MNR). El primero postuló como presidenciable al nieto del fundador de esta fracción nacionalista: Luis Alberto Lacalle Herrera. El segundo llevó como su candidato al sucesor de Wilson Ferreira Aldunate en el liderazgo del movimiento Por la Patria (PLP), Alberto Sáenz de Zumarán. Por último, el MNR concurrió con Carlos Julio Pereyra como su candidato a la presidencia.

El herrerismo puso siempre énfasis en las libertades, sobre todo, de empresa, en oposición al intervencionismo estatal originado durante la primera treintena del siglo; defendió el librecambismo favorable a los ganaderos contra el proteccionismo industrialista del segundo batllismo (1947-50) que encabezó Luis Batlle Berres, padre de Jorge, y mantuvo un nacionalismo antinorteamericano, más bien nacido de una nostalgia pro británica y de una posición neutralista durante la segunda guerra mundial, que de un antimperialismo económica y políticamente fundamentado. Es obvio, entonces, que al nieto le costara mucho menos asumir un discurso neoliberal frente a un Batlle y, que además, su modulación y su estilo fuesen menos enfáticos e hicieran más creíbles sus palabras que el apresuramiento liberalizador, la desmesura antiestatista de privatizar la seguridad social en un país de jubilados y el tono de neoconverso de su principal oponente.

Las otras corrientes del Partido Nacional abrevan, por el contrario, en un desarrollismo deshilvanado que, a la vez que defiende los intereses más corporativos y con consecuencias económicas más ineficientes de parte de los sectores propietarios del medio rural, propone reformas, de índole diversa, para promover el crecimiento equitativo de los grupos urbanos. Sin embargo, se diferencian claramente por su actitud ante el gobierno de Sanguinetti: mientras PLP es copartícipe decidido y principal de la gobernabilidad, el MNR rescata la tradición cívica de defensa de las libertades públicas y de los derechos ciudadanos que proviene de su fundador y se opone a la ley de caducidad. Así, el wilsonismo está rememorando, permanentemente, el papel histórico y la generosidad de su desaparecido líder en la gestación y

desarrollo de la transición, en tanto que los rochanos reivindicaban la dignidad y la fuerza moral de la lucha por los derechos humanos llevando, como su primera candidata a diputada por Montevideo, a Mátilde Rodríguez Larreta, valiente presidenta de la Comisión Nacional Pro Referéndum.

La izquierda llegó a las elecciones escindida luego de haberse mantenido formalmente unida desde 1971 hasta mayo de 1989. El Frente Amplio (FA), que mantuvo asociados a ciudadanos provenientes de los partidos tradicionales, a grupos de origen cristiano, a los partidos socialista y comunista y que adjuntó a los Tupamaros y sus aliados, llevó, como candidato presidencial, a Liber Seregni. Su escisión, que reúne al principal grupo frentista en la elección anterior, el partido Por el Gobierno del Pueblo (PGP), de extracción colorada y batllista, con el reunificado Partido Demócrata Cristiano, con la conservadora Unión Cívica, antiguo grupo católico, y con ciudadanos independientes bajo la denominación de Nuevo Espacio (NE), postuló a Hugo Batalla, máximo dirigente del PGP, como su presidenciable.

Las propuestas de ambos agrupamientos se concentraron en la reivindicación de políticas sociales y medidas concretas que promovieran el bienestar de los sectores sociales mayoritarios. Los aspectos económicos cruciales de su discurso fueron la disminución de la transferencia de recursos al exterior mediante una negociación más firme y decidida con los acreedores, el estímulo a la inversión productiva y el mantenimiento del patrimonio industrial y comercial del estado. Las principales discrepancias se encuentran en las formas de llevar a cabo sus programas; el Frente buscaba, según muchos izquierdistas, un camino de confrontaciones e innecesarios conflic-

tos, mientras que, por el contrario, el Nuevo Espacio se conduciría mediante la concertación y la conciliación con otras fuerzas políticas y sociales.

Este espectro partidario fue el presentado durante la campaña electoral. Si lo situáramos, por mero convencionalismo y sin prestar atención a variados matices, de derecha a izquierda quedaría así: de la extrema derecha a la derecha: pachequismo y herrerismo; de la centroderecha pasando por el centro hasta la centroizquierda: batllismo unido, wilsonismo, MNR y NE, y por último, de la izquierda a la extrema izquierda: FA.

CAMPAÑA ELECTORAL Y ACTO ELECCIONARIO

Las formas, modalidades, estilos y contenidos que adquirió esta competencia electoral fueron tan variados, políticamente tan plurales, publicitariamente tan novedosos y abarcadores de largos lapsos, que hacen muy difícil una mínima descripción.⁸ Aquí sólo se dejará constancia de algunos rasgos importantes para la interpretación de los resultados.

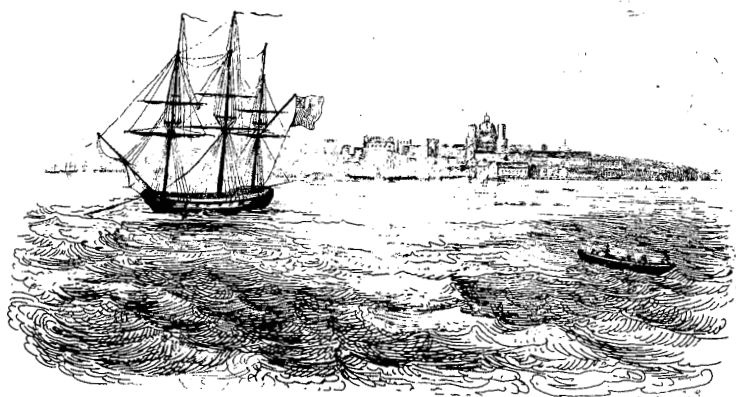
La campaña estuvo dominada y desarrollada fundamentalmente por los medios de comunicación masiva. La prensa, el radio y la televisión volcaron sus recursos a la captura de la entrevista de fondo, con el político o con el analista; a la búsqueda de las opiniones de los candidatos, a la presentación y al cotejo de las propuestas programáticas y, sobre todo, a la proyección de una imagen de pluralidad, diálogo y civilizada competencia. Los partidos accedieron, de acuerdo

⁸ A los efectos de una comparación con los partidos concurrentes y con la campaña electoral anterior véase Pablo Mieres, *¿Cómo votan los uruguayos? Las elecciones de 1984*, CLAEH-EBO, Montevideo.

2

1

4



con sus recursos económicos y, algunas veces, enfrentándose a tarifas diferenciales impuestas por las preferencias partidarias de los propietarios, a todos los medios. Basten como ejemplo estos datos del esfuerzo publicitario televisivo durante el periodo mayo-noviembre en horas de transmisión: 68 horas (h) 20 minutos (m) y 21 segundos (s) para el Partido Nacional, 85 h 51 m y 25 s para el Colorado, 26 h 20 m y 10 s para el FA y 10 h 47 m y 46 s para el NE. Por candidatos el esfuerzo en este rubro lo encabeza Batlle con 44 h 45 m y 05 s seguido por Lacalle con 32 h y 10 m. Resulta evidente que el esfuerzo no es igual a los porcentajes de votos obtenidos si se compara el 23,4% de los tiempos publicitarios utilizados por el batllismo para obtener un 15,5% de la votación contra 16,8% de los mismos tiempos usados por el herrerismo para alcanzar un 22,5% de los sufragios y 13,8% ocupado por el FA para lograr 21,2% de los votos.⁹

Los actos masivos, las concentraciones partidarias y las caravanas automovilísticas realizadas en Montevideo, sin duda numerosas y multitudinarias en algunos casos, no tuvieron, a juicio de muchos observadores políticos, la misma trascendencia que antaño, ni jugaron el decisivo papel proselitista de los medios masivos. En el interior, las giras de los presidenciables siguieron aglutinando a las diferentes colectividades políticas y conmoviendo cada pueblo. Pero, en las capitales departamentales, la información política fundamental fluyó por la red de repetidoras de las grandes televisoras nacionales.

El contenido de los mensajes emitidos por los partidos estuvo caracterizado por la ausencia de los discursos ideológicos centrales del batllismo, el nacionalismo

blanco y el transformismo de la izquierda. Por el contrario, una dicotomía entre un neoliberalismo monocrorde, difundido con insistencia por los publicistas de Batlle y Lacalle, y un antiliberalismo desorganizado y hecho de retazos de populismo demagógico, desarrollismo de los sesenta, estatismo y distribucionismo progresivo que se entremezclan, en diferentes proporciones, en los idearios de los demás candidatos, permeó todas las emisiones y todos los debates.

La concentración de las polémicas alrededor de los temas económicos de la deuda externa, el déficit fiscal, la apertura comercial, la inflación y el papel del Estado en la economía fue tan notable que muchas veces se tendía a pensar que los contrincantes preferían ese temario por predilección profesional o afición a la "ciencia lúgubre". Pero, muy por el contrario, cuando se apreciaban las discusiones con detenimiento, se comprobaba que el peso ideológico y la penetración en el sentido común de muchos conceptos introducidos por el neoliberalismo determinaban la agenda de los políticos, incluyendo y rebasando a la de toda la oposición.

Al mismo tiempo que los discursos políticos con inflexión nacional se disuelven y son progresivamente sustituidos por un coherente, simplista y beligerante planteamiento neoliberal, de un lado, y una amalgama desordenada, infusa y tradicional de ideas contrarias al neoliberalismo, de otro, aparece como crucial la tecnología electoral. Ésta abarcó, por lo menos, la fabricación de la imagen del candidato presidencial para ser ofrecido en el mercado político; el seguimiento de la campaña con el fin de determinar la aceptación o el rechazo que cada imagen generaba y las encuestas permanentes de intención de voto, con las que se ajustaban imagen y cam-

⁹ *Búsqueda*, 14 de diciembre de 1989, p. 15.

pañá ante las opciones contrarias y el electorado en su conjunto.¹⁰

Hace 25 o 30 años ningún político que se preciara, actuaba sin consultar a la maga o a la hechicera que tira las barajas, al quiromántico, al sacerdote, o por lo menos, a sus parientes viejos y experimentados en estas lides. Hoy, en el Uruguay, no hay político de medio pelo para arriba que dé un paso sin asesorarse con sus expertos en estadística electoral, sus analistas políticos y sus creativos de publicidad. Han surgido muchas empresas que encuestan la opinión, miden la presencia en los medios, crean imágenes políticas y diseñan campañas publicitarias para candidatos de cualquier partido o tendencia. Sus actividades comerciales han modificado el ambiente del proselitismo político, la opinión pública y la formación de capitales.

Un último rasgo relevante de la campaña electoral es que el acento fue puesto más en la responsabilidad política de los candidatos y en su capacidad para gobernar que en sus propuestas globales, sus programas de gobierno y sus medidas específicas. Las imágenes exitosas se construyeron sobre la credibilidad, la habilidad para tomar decisiones y las aptitudes para articular voluntades, conciliar intereses y negociar, de los políticos participantes. En este sentido, fue una campaña más personalista que partidista.

El acto eleccionario, al igual que el plebiscito de abril de 1989, fue enteramente

¹⁰ El notable esfuerzo por mejorar las técnicas de las encuestas de opinión tuvo su culminación el día de la elección cuando las televisoras privadas compitieron en celeridad para dar el resultado apoyadas por diferentes equipos de expertos en estadística social y analistas políticos. Uno de los equipos proporcionó el resultado con un 1% de error diez minutos después que se cerraron las votaciones, haciendo gala de destreza técnica y audacia política.

mente transparente. Más de 95% de los habilitados para votar, que se encuentran dentro del país o que tienen posibilidades de concurrir desde los países limítrofes, emitieron su voto. El resultado del escrutinio primario, realizado por los propios partidos, se conoció la noche de los comicios, y los candidatos contrarios al triunfador, Luis Alberto Lacalle, reconocieron su victoria antes de la medianoche. Lo mismo aconteció con la importante elección montevideana donde Tabaré Vázquez, su ganador frenteamplista, fue reconocido, unánimemente, en las primeras horas de la noche, al igual que la mayoría de los intendentes departamentales en cada una de sus capitales.

Los festejos que siguieron a la proclamación de los respectivos triunfos fueron cívicamente ejemplares. Los partidarios del presidente electo festejaron sobre la principal avenida capitalina y en los barrios residenciales de Pocitos y Punta Carretas. Los frenteamplistas lo hicieron en el popular barrio La Teja. Allí vive y dirige un club de fútbol el intendente triunfante.

RESULTADOS ELECTORALES Y CAMBIOS POLÍTICOS

Los dos principales resultados de estas elecciones son la derrota del Partido Colorado a nivel nacional y el triunfo del Frente Amplio en Montevideo. Dicho con esas palabras y en ese orden de importancia. Fue derrotado el partido que ha gobernado al país, después de Bernardo Prudencio Berro (1860-64) y exceptuando el corto periodo del Colegiado de mayoría blanca (1958-66), hasta el presente. El partido de la tradición gobernante y el gestor de la transición a la democracia es quien turna el poder a su secular opositor.

Por su parte, en Montevideo, ha triunfado el último partido en conformarse y también en escindirse, cuando muchos pronósticos auguraban su decadencia electoral. El Frente de los perseguidos y de los prisioneros de la dictadura llega, por primera vez, a las tareas de gobierno mediante una responsabilidad que involucra a la mitad de la población del país y compromete parte importante de los recursos materiales a nivel nacional.

En términos numéricos, el Partido Colorado supera los votos del FA y del NE en 966 unidades y el Frente logra en la capital una diferencia de 8% sobre el Partido Nacional que es su más cercano contendor (véase el cuadro 2). Nunca la fuerza electoral del partido dirigente del país fue comparable con el caudal de la izquierda, ni ha sido habitual, desde 1971, una diferencia tan importante en Montevideo.¹¹

Hasta ahí son válidos los artilugios numéricos. Luego, comienzan algunas falacias como las siguientes. Una, pueril pero repetida cotidianamente en el exterior, reza así: la ventaja de Lacalle sobre Seregni fue de 25,716 votos, es decir, 1.3% del electorado; los votantes crecieron en un 4.5% y los electores del Frente Amplio lo hicieron en un 0.7%; como el partido con tasas más altas y sostenidas de crecimiento entre el nuevo electorado es el Frente, bastaría un esfuerzo adicional para asegurar la próxima elección. Como es obvio se trata de un razonamiento falaz que no considera el sistema político y electoral vigente en el país.

Otra falacia se deriva de esta manera: la mitad del país, la capital, lo dirige, hoy, la izquierda; la otra mitad la gobierna la derecha; el país estaría ante un caso

clásico de poder dual. Sin embargo, el resultado, bien medido en términos dualistas, es el siguiente: 47.6% de los votos montevideanos son para la izquierda si se suman el Frente Amplio y el Nuevo Espacio; 47% de los votos a nivel nacional son para la derecha si se agregan el herrerismo, el pachequismo y el ala derecha del batllismo. O sea que, la izquierda es casi el 48% de la mitad del país y la derecha 47% de la república entera. Ahora bien, si se abandonan las falacias y se recorren algunas líneas argumentales se entenderá que pasó en esta elección.

Una ordenación más detallada de las cifras, comparando los datos actuales con los de 1984, muestra importantes cambios en el espectro y la disposición de las fracciones políticas. Si se ubican los subtemas de izquierda a derecha, en términos de su caudal electoral y para ambas elecciones, se observa, nitidamente, una caída pronunciada del centro político y un consecuente ascenso de la derecha y de la izquierda (véase la gráfica 1).

El ejercicio negociador de la transición y la exclusiva, y a veces hasta obsesiva, aspiración a la gobernabilidad agotaron a las dos principales fuerzas centristas: el batllismo dirigido por Sanguinetti y la corriente nacionalista liderada por Wilson Ferreira. La permanente oferta de estabilidad institucional olvidó la presencia de graves problemas económicos y políticos. Entre los batllistas el agotamiento hizo posible la aparición del discurso inmoderado y netamente neoliberal de Jorge Batlle y entre el wilsonismo, una vez fallecido su líder, la fatiga del acomodo a las circunstancias hizo factible que el ocasional aliado herrerista de 1984 hiciera renacer la corriente histórica de su abuelo. Pero, además, de estos determinantes colectivos, no se

¹¹ Véase Angel Venturini, *Estadísticas electorales, 1917-1989 y temas electorales*, EBO, 1989, pp. 62-63.

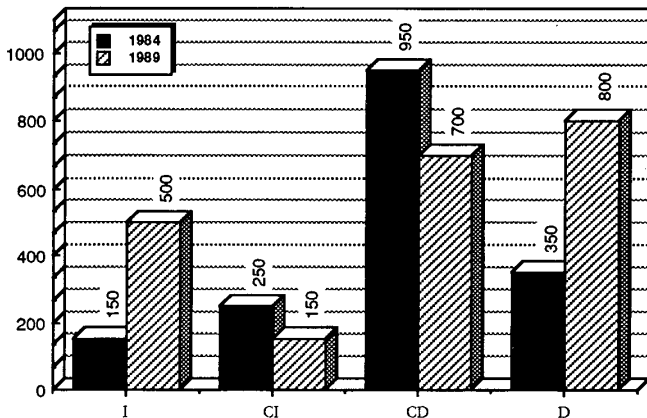
Cuadro 2
COMPOSICIÓN DEL ELECTORADO Y CRECIMIENTO
DE LOS PRINCIPALES SUBLEMAS (1984-1989)

<i>Partidos (lemas) y fracciones (sublemas)</i>	<i>Votos 1984</i>	<i>%</i>	<i>Votos 1989</i>	<i>%</i>	<i>Crec %</i>
Colorado	777 701	41.2	596 822	30.3	(26.0)
Pacheco-Pirán	183 588	9.7	288 652	14.6	50.5
Sanguinetti-Tarigo (84)	588 143	31.2			
Batlle-Sanguinetti y Fernández Faingold (89)			305 769	15.5	(50.3)
Nacional	660 767	35.0	766 290	38.9	11.1
Paysée-Maeso, Ortiz-Ferber y Lacalle (senador)(84)	215 514	11.4			
Lacalle-Aguirre (89)			444 119	22.5	97.4
Zumarán-Aguirre excepto Lacalle (84)	435 596	23.1			
Zumarán-García Costa y Pereyra-Tournée (89)			319 112	16.2	(29.9)
Frente Amplio					
Crottogini-D'Elía (84)	401 104	21.3			
Seregni-Astori (89)			418 403	21.2	(0.5)
Democracia Avanzada, Partido Socialista e Iz- quierda Democrática In- dependiente (84); Frente Amplio (89)	201 177	10.7	418 403	21.2	98.1
Nuevo Espacio					
Partido por el Gobierno del Pueblo, Partido Demó- crata Cristiano y Unión Cívica (84)	243 252	12.9			
Batalla-Quijano (89)			177 45	39.0	(30.2)
Frente Amplio y Nuevo Es- pacio sumados (en 1984 se suman el Frente Amplio y la Unión Cívica)	447 345	23.7	595 856	30.2	27.4
Votos válidos	1 885 753	100.0	1 970 744	100.0	4.5

Fuentes: Juan Rial, *Uruguay: elecciones de 1984. Sistema electoral y resultados*, CIAPE-IIDH, San José, 1986, pp. 135-40 y 144-47; *Búsqueda*, 18 de enero de 1990, p. 11, 25 de enero, p. 7, Montevideo.

Gráfica 1
IZQUIERDA Y DERECHA SEGÚN RESULTADOS
DE AMBAS ELECCIONES (1984-1989)

(miles de votos)



Izquierda I=DA+PS+IDI

Izquierda I=DA+PS+MPP+VA=FA

Centro-izquierda CI=PGP+PDC+UC

Centro-izquierda CI=PGP+PDC+UC=NE

Centro-derecha CD=BU+PLP+MNR

Centro-derecha CD=BU+PLP+MNR

Derecha D=P+H+Lacalle

Derecha D=P+H+RV

DA: Democracia avanzada (comunistas y aliados), PS: Partido Socialista, IDI: Izquierda Democrática Independiente, PGP: Partido por el Gobierno del Pueblo, PDC: Partido Demócrata Cristiano, BU: Batllismo Unido (en 1984 incluye 15, 85 y 89, y en 1989 también se suma a Fernández Faingold), PLP: movimiento Por la Patria, MNR: Movimiento Nacional de Rocha, H: Herrerismo, P: Pachequismo, Lacalle: listas de la fórmula Zumarán-Aguirre que en 1984 fueron encabezadas por Lacalle al Senado, RV: Renovación y Victoria.

1989: elecciones en Uruguay

puede eludir que la brillantez y la vanidad de Batlle junto con la mesura, a veces casi mediocre, y el tesón de Lacalle, actuaron con signos opuestos. El presidente a priori deterioró el centro colorado hasta hacerlo irreconocible y minúsculo, mientras que el blanco empeñoso reconstituyó y remozó la derecha de su partido.

A grandes trazos, la historia fue así. Una vez culminada la transición y declarado como fue por el mismo presidente Sanguinetti, que en el plebiscito no hubo ni vencidos ni vencedores, quedó la

generalizada impresión de que todo estaba por hacerse. Los ingresos por aumentar, la educación por mejorarse, la salud por atenderse y el estado por modernizarse eran, todavía, expectativas para la población entera. Sobre esas esperanzas medraron los correligionarios y los aliados del presidente y también aprovecharon los opositores. La idea, confirmada en las urnas, de que los derechos humanos se mantienen hoy opacando sus pasadas violaciones, se transformó en la inversa: la pregonada igualdad de oportunidades no se alcanza,

como lo ratifica el resultado electoral, sin ocuparse de las condiciones que la hacen posible.

La casi idéntica distribución de los votos entre partidarios y oponentes de la ley de caducidad, por un lado, y entre sectores políticos favorables y contrarios a la ley, por el otro, muestra la correspondencia de valores políticos y posturas prácticas que tiene el electorado. En cifras, se tiene que votaron, en abril, por mantener la ley 1 082 454 ciudadanos y lo hicieron, en noviembre, por los partidos y fracciones que la respaldaron 1 058 966. A su vez, los partidarios de la derogación fueron 799 109 y las listas partidarias de las colectividades que se opusieron a la ley obtuvieron 806 857 sufragios.¹²

Sin embargo, si el declive pronunciado del centro político se concibe como una condena, producto de diagnósticos de diversa índole, a la falta de políticas tendientes a asegurar la igualdad de derechos ciudadanos en los términos amplios que están consignados en la Constitución, la simetría o concordancia aludida no es válida.

Es verificable que tanto el discurso neoliberal del presidente electo como la propuesta redistributiva de la izquierda apuntan, en el papel, al mejoramiento de las condiciones que satisfagan el postulado de isonomía. Es decir, en ambos discursos se pretende la igualdad de derechos ciudadanos como condicionante de la democracia: pero en un caso, se propone una igualdad de oportunidades que permita la libertad de elegir, mientras que en el otro se pide una igualdad de condiciones sociales que aseguren el desarrollo político de los ciudadanos. Así es obvio, que esos votantes partidarios de alguna forma de isonomía estu-



vieran en posiciones antagónicas cuando hubo que pronunciarse sobre la igualdad ante la ley.

Un paso de la gráfica 1 a la composición por subletras y su crecimiento presentadas en el cuadro 2, exhibe tendencias ascendentes rotundas de la derecha herrerista, cuya participación crece en un 97.4%, y de la izquierda frentista, que lo hace en un 98.1%. Este crecimiento de la derecha que más se expande es casi uniforme a nivel regional: su participación aumenta 94.2% en el interior mientras que lo hace en un 98.5% en la capital. No ocurre lo mismo con el crecimiento de la izquierda cuyas tasas regionales son 70.7% y 107.8% respectivamente. La tendencia ascendente de la derecha está reforzada por un crecimiento del pachequismo en un 50.5% (véase el cuadro 3).

¹² Véase *Búsqueda*, 14 de diciembre de 1989, p. 15.

Cuadro 3
VOTACIÓN POR REGIONES Y CRECIMIENTO DE SU PARTICIPACIÓN
REGIONAL EN PORCENTAJES

<i>Partidos y sublemas</i>	<i>1984</i>		<i>1989</i>	
	<i>Int.</i>	<i>Cap.</i>	<i>Int.</i>	<i>Cap.</i>
Colorado	45.9	36.0	34.8	25.0
Pacheco (84-89)	10.0	9.4	14.7	14.6
Sanguinetti (84)				
Batlle (89)	35.4	26.5	19.9	10.3
Nacional	42.1	27.0	49.4	26.6
Ortiz, Paysée y Lacalle (senador) (84)				
Lacalle (89)	15.5	6.9	30.1	13.7
Zumarán (excepto Lacalle) (84) Zumarán y Pereyra (89)	25.7	20.1	19.0	12.9
Frente Amplio	10.3	33.6	9.9	34.5
Crotogini (excepto PGP y PDC) (84)				
Seregni (89)	5.8	16.6	9.9	34.5
Unión Cívica (84) y Otros (89)	1.7	3.4	0.4	0.8
Nuevo Espacio				
PGP, PDC y UC (84)				
Batalla (89)	6.4	20.3	5.5	13.1
Totales	100.0	100.0	100.0	100.0

<i>Partidos y sublemas</i>	<i>Crecimiento de las participaciones en porcentajes</i>	
	<i>Int.</i>	<i>Cap.</i>
Colorado	(24.2)	(30.6)
Pacheco (84-89)	47.0	55.3
Sanguinetti (84)		
Batlle (89)	(43.8)	(61.1)
Nacional	17.3	1.5
Ortiz, Paysée y Lacalle (senador) (84)		
Lacalle (89)	94.2	98.5
Zumarán (excepto Lacalle) (84) Zumarán y Pereyra (89)	(26.1)	(35.8)

Partidos y sublemas	Crecimiento de las participaciones en porcentajes	
	Int.	Cap.
Frente Amplio	3.9	2.7
Crotogini (excepto PGP y PDC) (84) Seregni (89)	70.7	107.8
Unión Cívica (84) y Otros (89)	76.5	(76.5)
Nuevo Espacio		
PGP, PDC y UC (84) Batalla (89)	14.1	35.5

Int.: Interior; Cap.: Capital; (.): valores negativos; PGP: Partido por el Gobierno del Pueblo; PDC: Partido Demócrata Cristiano; UC: Unión Cívica.

Fuentes: Juan Rial, *op. cit.*, 18 y 25 de enero de 1990.

La composición del electorado en términos regionales se hizo, levemente, menos montevideana si se aprecia que el porcentaje de votantes capitalinos cayó en 1.9%. Pero la misma composición por sublemas fue muy distinta y siguió el comportamiento siguiente. La participación del electorado montevideano en los sublemas centristas, batllismo, PLP-MNR y NE, declinó a tasas de 23.2%, 10.3% y 9.2% respectivamente. Éstas son mucho mayores, en términos absolutos, que la total. Por el contrario, la misma participación para los sublemas derechistas, pachequismo y herrerismo, se mantuvo. Mientras tanto para la izquierda creció en un 4.2% (véase cuadro 4). Se confirma así el carácter mucho más permanente del votante de las opciones extremas, en comparación con el que decide por posiciones de centro.

En conclusión, la elección muestra cambios políticos importantes y sin duda históricos en lo que se refiere a la rotación de los partidos en el poder. Pero, también, se han producido alteraciones sustanciales en la composición del elec-

torado ensanchándose la izquierda y la derecha en detrimento del centro y se ha confirmado la identificación, por lo menos en lo que respecta a los derechos humanos fundamentales, entre una opción axiológica como el plebiscito y las distintas y fragmentarias opciones político partidarias. En el ámbito regional se comprueba la persistencia en la participación de las opciones extremas y la variabilidad de las magnitudes relativas del centro.

ALGUNAS PERSPECTIVAS DEL NUEVO GOBIERNO

El gobierno asciende con una amplia base local (16 de las 19 intendencias), un gabinete de coalición con el Partido Colorado (ocho ministros blancos y cuatro colorados) y un respaldo parlamentario que, aparentemente, alcanzaría a los dos tercios de la Asamblea General. Si esto es así, el programa económico de choque fiscal y las reformas necesarias para hacer realidad el ajuste estructural

Cuadro 4
CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN REGIONAL DEL VOTO POR PARTIDOS
POLÍTICOS Y SUBLEMAS

<i>Partidos y sublemas</i>	<i>Int.</i>	<i>porcentaje</i>	<i>1984</i>	<i>Cap.</i>	<i>porcentaje</i>
Colorado	459 113	59.0		318 588	41.0
Pacheco (84-89)	100 118	54.0		83 470	46.0
Sanguinetti (84) Bat- lle (89)	354 191	60.0		233 952	40.0
Nacional	421 687	64.0		239 080	36.0
Ortiz, Paysée y Laca- lle (senador) (84) y Lacalle (89)	154 875	71.9		60 639	28.1
Zumarán (excepto Laca- lle) (84), Zumarán y Pereyra (89)	257 688	59.2		177 908	40.8
Frente Amplio	103 614	26.0		297 490	74.0
Crotochini (excepto PGP y PDC) (84)					
Seregni(89)	57 578	28.2		146 515	71.8
Nuevo Espacio					
PGP, PDC y UC (84) y Batalla (89)	63 839	26.2		179 413	73.8
Votos válidos	1 001 264	53.1		884 489	46.9
Colorado	370 450	62.1		226 372	37.9
Pacheco (84-89)	156 650	54.3		132 002	45.7
Sanguinetti (84) Bat- lle (89)	211 927	69.3		93 842	31.5
Nacional	525 068	68.5		241 222	31.5
Ortiz, Paysée y Laca- lle (senador) (84) y Lacalle (89)	319 946	72.0		124 173	28.0
Zumarán (excepto Lacalle) (84), Zumarán y Pereyra (89)	202 442	63.4		116 670	36.6
Frente Amplio	105 625	25.2		312 778	74.8
Crotochini (excepto PGP y PDC) (84) Seregni(89)	105 625	28.2		312 778	74.8

<i>Partidos y sublemas</i>	<i>Int.</i>	<i>porcentaje</i>	<i>1984</i>	<i>Cap.</i>	<i>porcentaje</i>
Nuevo Espacio PGP, PDC y UC (84) y Batalla (89)	58 476	33.0		118 977	67.0
Votos válidos	1 063 942	54.0		906 802	46.0

Partidos y sublemas *Crecimiento de las participaciones en porcentajes*

	<i>Int.</i>	<i>Cap.</i>
Colorado	5.2	(7.8)
Pacheco (84-89)	.5	(0.6)
Sanguinetti (84) Batlle (89)	15.5	23.2
Nacional	7.0	(12.5)
Ortiz, Paysée y Lacalle (senador) (84) y Lacalle (89)	0.1	(0.3)
Zumarán (excepto Lacalle) (84), Zumarán y Pereyra (89)	7.1	(10.3)
Frente Amplio	3.1	1.1
Crotonini (excepto PGP y PDC) (84) Seregni(89)	(10.6)	4.2
Nuevo Espacio PGP, PDC y UC (84) y Batalla (89)	25.6	(9.2)
Votos válidos	1.7	(1.9)

Fuentes: Juan Rial, *op. cit.*, *Búsqueda*, 18 y 25 de enero de 1990.

estarían asegurados en lo relativo a su puesta en práctica legislativa y a su instrumentación ejecutiva. Pero, un gobierno agresivamente neoliberal, si se juzga por la retórica preelectoral, tendría algunas trabas parlamentarias importantes y algunos opositores sociales muy beligerantes. Los temas polémicos cruciales a los que se enfrentará el nuevo régimen son, por una parte, político-económicos y, por otra, institucionales.

Entre los primeros destacan el nivel de los ingresos de los trabajadores y jubilados, las medidas del ajuste fiscal destinadas a modificar la estructura impositiva y a reducir el gasto público y las propuestas de privatización de empresas estatales que se dedican a actividades productivas y de intermediación financiera. Respecto a los temas institucionales son sumamente señalados la reglamentación del derecho de huelga y otras acciones



2

2

5

1989: elecciones en Uruguay

sindicales, la reforma desestatizante de la educación y la interpretación de los límites de la autonomía municipal.

La construcción de escenarios de comportamiento de los parlamentarios es siempre compleja cuando los mandatos no tienen fuerza imperativa y, por lo general, el representante actúa como tal y no como delegado de su partido. En Uruguay es costumbre y práctica una cierta laxitud en la relación entre los partidos y sus legisladores excepto en el caso de la izquierda histórica. En la actual situación debe agregarse que el centro parlamentario ha decaído grandemente: los grupos parlamentarios de Sanguinetti y Wilson Ferreira que en 1985 contaban con la mayoría de la Asamblea General (unos 67 legisladores en 130) no suman hoy más de una docena de miembros si

se les suma a los parlamentarios estrictamente adictos al presidente saliente, los llamados batllistas no alineados.¹³ Esta decadencia conducirá, casi con seguridad, a un comportamiento más oscilante de esos legisladores.

A pesar de las dificultades indicadas, en el cuadro 5 se han distribuido los votos de los parlamentarios de los principales lemas y sublemas de acuerdo con las propuestas del ejecutivo sobre algunos de los temas mencionados. La distribución de los alineamientos probables se ha efectuado pensando en las definiciones de campaña realizadas por los agrupamientos a los que pertenecen los legisladores. Si bien el ejercicio es muy primario

¹³ Véase *Búsqueda*, 15 de febrero de 1990, p. 40.

Cuadro 5

DISTRIBUCIÓN DEL VOTO PROBABLE DE LOS PARLAMENTARIOS POR PROPUESTAS DE LEY DEL PODER EJECUTIVO. NÚMERO PROBABLE DE PARLAMENTARIOS A FAVOR (F) Y EN CONTRA (C) DE LAS PROPUESTAS DE LEY DEL PE

Votos	Total		H		PLP		MR		BJ		BS		P		FA		NE	
	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C
Propuestas																		
a) Político																		
económicas																		
Ajuste fiscal	58	72	36	0	0	2	0	14	14	0	8	0	0	17	0	28	0	11
Presupuesto	102	28	36	0	2	0	14	0	14	0	8	0	17	0	0	28	11	0
Privatización	60	70	36	0	2	0	0	14	14	0	8	0	0	17	0	28	0	11
b) Institucionales																		
Reglamentación																		
del derecho de																		
huelga	77	53	36	0	2	0	0	14	14	0	8	0	17	0	0	28	0	11
Reforma																		
educativa	69	61	36	0	2	0	0	14	14	0	0	8	17	0	0	28	0	11

H: herrerismo incluyendo Renovación y Victoria; PLP: movimiento Por la Patria; MR: Movimiento Nacional de Rocha; BJ: batllismo unido ala jorgista (de Jorge Batlle); BS: batllismo unido ala sanguinettista (de Julio Ma. Sanguinetti); P: pachequismo; FA: Frente Amplio; NE: Nuevo Espacio. Los parlamentarios batllistas no alineados, cuatro en total, se han repartido por partes iguales entre jorgistas y sanguinettistas. Se ha hecho caso omiso de la división fraccional del pachequismo.

Los presentes escenarios fueron terminados el 2 de marzo de 1990 con los datos de la asunción del mando. Como este tipo de ejercicios valen por su capacidad de predicción *ex ante* no se modificaron en esta versión final del artículo

Fuentes: Juan Rial, *op. cit.*, *Búsqueda*, 18 y 25 de enero y 15 de febrero de 1990, *La Hora Popular*, 4 de febrero de 1990, p. 10.

e imperfecto, en la medida que no considera una serie de compromisos y adhesiones que se concretan mediante la compleja trama clientelística de los partidos tradicionales y no toma en cuenta el comportamiento individual de los que ya han sido legisladores, muestra que es posible que el programa de gobierno no posea mayoría parlamentaria en todos sus aspectos. También da cuenta de la falta de uniformidad que, posiblemente, tendrán esas mayorías.

La oposición social al programa del nuevo gobierno es ya muy decidida en el

mundo sindical, tanto respecto al programa económico como en lo relativo a la reglamentación del derecho de huelga. No es difícil predecir que todos los grupos sociales que participan en el proceso educativo dependiente del estado, se enfrentarán a cualquier proyecto que intente privatizar la prestación del servicio y diluir el perfil laico de la educación. Otros sectores sociales, vinculados unos al empresariado industrial y otros al cooperativismo agropecuario, es factible que se muestren contrarios o reticentes a las nuevas políticas, en la misma medida,

que éstas se apliquen, rápida y agresivamente, respecto a la disminución del gasto público y a la apertura de la economía.

La oposición política y las fuerzas sociales que se oponen al proyecto neoliberal tendrán una conjunción privilegiada en la defensa del gobierno montevideano. La relación entre poder ejecutivo e intendencia montevideana será, sin duda, la prueba del avance o retroceso de las orientaciones políticas mayoritarias: la derecha herrera a nivel nacional y la izquierda frente amplista en la capital.

En particular, la cuestión de la autonomía municipal será un punto de importantes fricciones con la intendencia montevideana que, gobernada por una izquierda en ascenso, con deseos de solucionar problemas y carencias de los capitalinos y con la necesidad de hacerlo si mañana quiere seguir siendo gobierno, ampliará, hasta sus límites, el espacio autonómico en el departamento más poderoso del país. Pero, este conflicto, no sólo será patrimonio de los capitalinos, porque las intendencias gobernadas por los blancos del PLP y del MNR tratarán de extender el ámbito de sus decisiones, pugnando por la descentralización de muchas facultades que hoy están concentradas en el ejecutivo nacional.

Las condiciones de la democracia son, por un lado, de posibilidad: aquellas que sean válidas para la democracia o para otra forma política, y por otro, condiciones necesarias: las que debieran darse cuando hay democracia. El nuevo gobierno nacional, pero también el montevideano, advienen al poder porque la ciudadanía quiere que se resuelvan sus necesidades de empleo, de ingreso, de educación, de salud, de seguridad social. La transición a la democracia, tal como la valoran las mayorías que la han defendido siempre, terminó. Ahora, esas mis-

mas mayorías, quieren que se cambien instituciones y estructuras para que se cumpla con la igualdad de derechos proclamada en la Constitución. Y ése es el perpetuo problema de nuestras sociedades latinoamericanas: una vez instalados en la democracia no se da una de sus condiciones de posibilidad: que todos los ciudadanos tengan iguales derechos sociales y, en el caso uruguayo, ni una de sus condiciones necesarias: que todos los hombres sean iguales ante la ley.

El futuro que afrontan los gobernantes y la sociedad uruguayos está marcado por esta pregunta: ¿se pueden construir y desarrollar las condiciones para la democracia mediante un régimen democrático? Y no se trata ni de un sentido ni de una paradoja, sino de un problema.

La principal dificultad de este problema es que no ha tenido una solución histórica latinoamericana. Uruguay, además, tiene muchas desventajas que provienen de una economía débil y de una sociedad envejecida como para intentar una solución viable.¹⁴ Tal vez posea una sola ventaja: la capacidad de su personal político para hacer acuerdos de amplio respaldo ciudadano.¹⁵ Si esa aptitud se utiliza para realizar los cambios necesarios se abrirá una vía, incierta, pero promisoría. Por el contrario, si se transita por el camino de la imposición, tan caro y frecuente entre otros neoliberales del continente, el futuro será desastroso.

¹⁴ Para la economía véase Instituto de Economía-FESUR, Uruguay 1989. Informe de Coyuntura, FCU, Montevideo, 1989.

¹⁵ Sobre la tradición y la institucionalidad democráticas en Uruguay conviene consultar Germán Rama, *La democracia en Uruguay*, GEL, Buenos Aires, 1971.

